

uruguay: las bases del deterioro institucional 1966-1973 *

eduardo gitli

En este breve ensayo trataré de describir los factores que incidieron sobre el rápido deterioro de las instituciones en el período 1966-1973. Sin embargo debo aclarar que no me referiré —al contrario de lo que se suele hacer en este tipo de artículos— al proceso final que llevó a la ruptura formal del orden constitucional el 27 de junio de 1973 en el Uruguay. Este último, que se podría ubicar entre los años 1971-1973 ha sido objeto de reiterados estudios por varios autores y por el que esto escribe, y pienso que nos apartaría seriamente del objetivo que me he fijado.

Lo que interesa —y me parece que constituye un aporte más sustancial— es analizar el conjunto de elementos que fueron determinando una pérdida progresiva de la legitimidad de las

instituciones democráticas ante las diferentes clases, capas y estratos del país, desembocando en una crisis política y económica que si de fechas se trata podría comenzar —siguiendo a Zelmar Michelini— en diciembre de 1967 con el ascenso casual de Jorge Pacheco Areco a la presidencia de la República, y el inmediato cierre de varias publicaciones, iniciando varios meses después con las Medidas Prontas de Seguridad lo que muchos comentaristas han designado como “dictadura constitucional”.

En realidad los sucesos del año 1967, observados en forma aislada podrían causar la sorpresa de cualquier curioso. Entre marzo y diciembre del mismo año, y bajo el mismo gobierno —teóricamente— se pasó de una conducción política que hoy calificaríamos de progresista, a un gobierno de extrema derecha (en el sentido más tradicional de la palabra). Uno de los ministros de la fase inicial de este gobierno —Michelini pasaría cuatro años después a ser uno de los más grandes líderes del Frente Amplio opositor y luego asesinado.

* Este ensayo recibió el primer premio del concurso efectuado en 1984-1985 por el *Latina-merika-Institutet i Stockholm* de la Universidad de Estocolmo. El autor agradece a los jurados Henry Finch (Universidad de Liverpool), Goran Lindahl (Universidad de Estocolmo), Milton Vanger (Universidad de Brandeis, Boston) y Danilo Astori (Universidad de la República, Uruguay).

De alguna manera, este rápido proceso indicaba junto a su posterior desenlace, la existencia de un período de incubación previo, lo suficientemente largo como para permitir luego —de un plumazo— borrar años de equilibrio y consenso democrático. Hacia este tema apuntamos.

La historia latinoamericana de este siglo se caracterizó por una secuencia de gobiernos de facto, populistas o conservadores, donde los gobiernos civiles determinados por algún tipo de juego democrático, eran más bien la excepción. De todos los países del continente Uruguay fue uno de los que tuvo la mayor permanencia de instituciones democráticas y gobiernos civiles, brevemente interrumpidos en 1933. Esto dio lugar a que desde las primeras décadas se hiciera referencia al Uruguay como "la Suiza de América", indicando con esto no solamente la forma de gobierno, sino la tranquilidad política que caracterizaba al país y el origen europeo de la mayor parte de su población. Este hecho, unido a una situación económica que permitió una elevación casi continua del salario real y del producto hasta 1957 dio origen a la expresión de "como el Uruguay no hay", que más que una fórmula chovinista era toda una filosofía de vida. Y si había algunos excépticos que lo llamaban "el Gibraltar de América", esto era muy poco conocido.

Sería falso argumentar que las crisis mundiales no tocaron al Uruguay o que no hubo crisis económicas de origen netamente interno. La diferencia con el resto de los países del subcontinente fue que siempre se encon-

traron salidas políticas y económicas combinadas, que se explicaban tanto por la propia estructura económica del país como por el marco histórico y geopolítico que le tocó vivir. A esta especie de equilibrio se le ha dado varios nombres: bonapartismo (Louis), conciliación (Real de Azúa), forma particular de la lucha de clases (Bonilla), equilibrio inestable (Ares Pons), etc.

La realidad peculiar que le tocó vivir al Uruguay es fruto de sus condiciones de desarrollo económico a partir de 1904 en que se produjo la verdadera unificación política del país y el comienzo de lo que se ha dado en llamar "el Uruguay batllista". La contradicción ciudad— campo tal como se daba en el país no era la réplica de los movimientos campesinos europeos, ni siquiera de otros más cercanos como el mexicano. Su base estaba dada fundamentalmente por distintos tipos de organización económica que daba lugar a distintos tipos de organización política, así como a una falta de integración nacional. Es necesario recordar que los departamentos opositores blancos se ubicaban cerca de la frontera. La victoria de las fuerzas batllistas sobre el caudillismo blanco no implicó un cambio en las relaciones de producción sino su control político centralizado. Tanto es así que la victoria militar de las fuerzas gubernamentales ni siquiera se tradujo en una exacción económica directa como hubiera sido de esperar, sino que se condonaron las deudas de guerra, lo que evitó el fraccionamiento intensivo de las tierras, tal como se había dado en los grandes señoríos de Inglaterra.

Hoy en día es común en algunos escritores criticar la falta de una reforma agraria por parte del gobierno como raíz de todos los males futuros. Olvidan que siempre que hubo una reforma de este tipo, en cualquier país, había detrás un poderoso movimiento social que la impulsaba, llevando a la utilización no sólo de organización política, sino de medidas de fuerza. En el caso uruguayo no existía ninguna de las tres cosas. La demanda de una reforma agraria es políticamente posterior y de origen urbano. El movimiento popular la incorporó a sus reivindicaciones años más tarde, tanto por razones de tipo "latinoamericanizantes" como por la presión de algunas organizaciones sindicales localizadas tanto desde el punto de vista geográfico como del tipo de producción: arroceros en Treinta y Tres cañeros de Bella Unión. Los últimos, acaudillados por el líder tupamaro Raúl Sendic, exigían la expropiación de un latifundio de 20,000 hectáreas que ni siquiera estaba en explotación.

El dinamismo económico uruguayo se basó en un reparto del excedente obtenido en la producción ganadera basado en la enorme renta diferencial a nivel mundial. Esta transferencia de excedentes se producía principalmente al nivel de la circulación, tanto por el control de precios guiado por presencia del Frigorífico Nacional como ente "testigo" para los precios internos, como por los impuestos a las exportaciones. Unido a una política proteccionista al nivel industrial y clientelista al nivel de la generación de empleos públicos posi-

ibilitó no sólo el crecimiento económico sino el relativamente alto nivel del empleo. En estas condiciones, la lucha por el reparto del excedente pasaba necesariamente por el arbitrio del estado. De manera que el acceso al aparato estatal por parte de todos los sectores sociales era vital para mantener el consenso.

El gran servicio que presta la democracia al sistema capitalista es que permite a la burguesía el balanceo permanente de fuerzas para solucionar sus conflictos por medios pacíficos, así como buscar el recambio salvador cuando ciertas pautas coyunturales podrían convencer a las clases desposeídas de la inminente necesidad de un cambio de sistema. Esta regla de juego se altera cuando el sistema y aparato de gobierno, por diferentes razones, no tiene la capacidad para generar un consenso que respete las fuerzas reales de cada grupo social. En gran parte de América Latina esta carencia se expresa en la permanente rotación civiles-militares en el gobierno. En el caso de Uruguay si bien el gobierno en sí podía carecer de esta cualidad, la Historia había brindado otros mecanismos para resolver las contradicciones. Aunque éstos podían funcionar siempre y cuando desde el punto de vista de la tendencia a largo plazo, hubiera algún excedente para repartir.

En el Uruguay existieron dos instrumentos políticos que sirvieron de mecanismos para encauzar la resolución de las confrontaciones políticas por medios pacíficos: la ley de lemas y el cambio en la forma de gobierno

(y las constituciones). El primero consistía en última instancia en que cualquier núcleo político se podía adherir a cualquiera de los partidos, sin necesariamente obedecer a ninguna autoridad central, podía postular su candidatura en la forma que lo deseara y una vez entrados al aparato gubernamental podían efectuar cualquier tipo de alianza. Lo único importante es que las distintas fracciones de cada partido unieran sus votos en el momento electoral. Este kafkiano invento, permitió durante mucho tiempo el acceso bastante libre a la actividad política de quienes tuvieran tales inquietudes. El estado se transformaba en un botín a repartir, así como en un fuerte proveedor de empleos. La coparticipación en el gobierno hacía que este reparto reflejara la correlación de fuerzas entre los dos partidos. Hasta 1951 la distribución del botín estatal se hacía a través de las cámaras legislativas, para luego ser institucionalizado a través del sistema del "3 y 2"; por éste, se entregaba la dirección de los entes autónomos a un colegiado de tres personas de un partido y dos del otro.

Unido a lo anterior —y más kafkiano si se quiere— eran los cambios en el sistema de gobierno en conjunto con la aprobación de nuevas constituciones políticas. Los hubieron en 1917, 1934, 1942, 1951 y 1966. Cada constitución daba inicio a una nueva época con alguna característica especial. Toda la controversia en torno a este tema tiene su origen en el sistema colegiado de gobierno ideado por José Batlle y Ordóñez de inspiración europea (suiza). Su motivación central era posibilitar el gobierno de un solo par-

tido, electo en forma democrática, pero sin permitir la autoridad unipersonal. Pero lo que fue en sus comienzos una parte integrante de la ideología de un movimiento (el batllismo) dentro de un partido, pasó de a poco a constituir un marco de negociaciones para resolver problemas políticos coyunturales. Y las distintas fuerzas en pugna eran colegialistas o no según sus conveniencias momentáneas. Cada vez que el sistema entraba en una fase de crisis política, simplemente se culpaba al sistema anterior de gobierno. En verdad era éste un mecanismo ingenioso porque permitía argumentar al partido en el gobierno que el culpable de cualquier cosa era el sistema y no él. Al mismo tiempo el partido opositor podía aprovechar el cambio de sistema para ganar algún nuevo espacio político.

De esta manera, el sistema presidencialista, culpable de todos los males de 1934 en adelante, fue erradicado en 1952, y aparece como el salvador del sistema en 1966. Al mismo tiempo el líder del Partido Nacional Luis Alberto de Herrera podía darse el lujo de ser colegialista en 1917, anti-colegialista en 1933 y colegialista en 1951. Sus herederos oficiales a su vez podían ser presidencialistas en 1966.

El funcionamiento de este sistema de recambio y de reparto constituía un ingenioso seguro de vida que se habían firmado mutuamente ambos partidos y que —como diría Nestor Campiglia— les permitió gozar de una vida larga y saludable. Pero desde el punto de vista estratégico no constituían más que "aparatos ortopédicos" (Benvenuto). En lo esencial las pautas de

acumulación no variaban; lo que variaba era su ritmo, determinado por la limitación de los excedentes.

Al final de la guerra de Corea se agota también la base material de la coexistencia en que los excedentes del sector pecuario se distribuían amistosamente entre los terratenientes, el estado y sus clientes y la burguesía industrial. Hasta alrededor de 1957 el salario real continuará su ascenso, para luego comenzar una pendiente de la que no se recuperará jamás. El proteccionismo del Mercado Común Europeo y de Estados Unidos junto al desarrollo de los sustitutos sintéticos de la lana provocan el deterioro de las posibilidades internacionales de comercialización. Es claro que en este momento debería producirse algún cambio en los patrones de acumulación, pero la dinámica de las estructuras políticas uruguayas no lo permite. El aparato estatal continúa respondiendo en la forma tradicional por lo que se transforma cada vez más en un mediador presionado entre los distintos grupos de interés. En 1958 llega al poder el Partido Nacional, después de 93 años y por primera vez en el siglo. Governa hasta 1966 a través de todas sus tendencias internas por medio del sistema colegiado, sin efectuar más que ajustes coyunturales.

A esta altura es necesario hacer algunas puntualizaciones con respecto al ejército. Hoy en día es parte del anecdotario folklórico que el autogolpe de estado del presidente Gabriel Terra en 1933 tuvo que acudir al cuerpo de los bomberos, debido en gran parte a la reticencia de los militares. En su tradición civilista tiene mucho

que ver el ser el país una especie de estado "tapón" entre dos grandes potencias del continente. En estas condiciones fue siempre política de los militares no hacer nada que pudiera generar una intervención "pacificadora" por parte de Brasil o Argentina. La astucia de José Battle y Ordóñez lo llevó a fraccionar y rotar los mandos militares de manera de disminuir su poder. Estos factores fueron creando una mentalidad militar que yo denominaría más bien "profesionista" que "profesionalista", para utilizar un juego de palabras de distinta significación en varios países de América Latina. Los militares uruguayos se caracterizaban por un elevado nivel técnico que no necesariamente aplicaban a mejorar su funcionamiento operativo, sino para generar ingresos extras. El servicio militar profesional se convirtió de este modo en una actividad parcial que se fue profundizando en la medida en que la crisis económica los forzaba cada vez más a la "salida externa" que llegó a revestir caracteres desesperados,** pero al no tener los militares tradición de participación política (más allá de la que necesitaban para elevarse en los grados), ni fuertes reivindicaciones específicas en el campo operativo (por ejemplo en comparación con la rebelión del Gene-

** Como recuerdo personal puedo agregar que de los dos únicos coroneles que conocí en mi infancia, uno, profesor de secundaria, tuvo que pasar a retiro por maniobras poco claras en las cajas militares; y el otro, también profesor de secundaria, proveniente de una familia de héroes militares profesionales, candidato a un alto puesto en la estructura castrense, fue sorprendido vendiendo televisores robados a un nivel de distribución artesanal.

ral Roberto Viaux en Chile) no tenían forma de canalizarlas. De ahí su desafección y desinterés por penetrar en el terreno político. Esto no implica que cada tanto no se reunieran grupos de militares para conspirar con un grado de secreto tal que al otro día aparecía publicado en alguno de los periódicos. Como se diría en la jerga legal, no tenían "idoneidad" para ejercer la conspiración. Tampoco eran parte de un proyecto específicamente militar sino como apéndices de alguno de los partidos políticos. Como anécdota curiosa, pero que ejemplifica lo anterior, Uruguay declaró la guerra al Eje en febrero de 1945 (junto a otros países de América Latina), tres meses antes de la victoria aliada. Y esa guerra, en la que no combatió ningún soldado uruguayo duró hasta octubre de 1953. Durante este período los miembros las fuerzas armadas se beneficiaron de prestaciones aumentadas de tiempo de guerra (Faraone). Todavía en enero de 1968, en una asamblea del Centro Militar, una mayoría de 543 sobre 851 oficiales se negaba a homenajear a los soldados bolivianos caídos en la lucha antiguerrillera en Bolivia. Recién en septiembre de ese año renuncia el Gral. Liber Seregni a la jefatura de la región militar más importante para asumir en 1971 el liderazgo político de la izquierda uruguaya.

Estos antecedentes, si indican algo, es que cuando los militares sean sacados de su letargo en septiembre de 1971 para conducir la lucha antiguerrillera, tendrán que revalorar su inserción como tales dentro de la sociedad uruguaya. No consideran que le deban nada, por lo que si se trata de salvar al

capitalismo como tal, exigirán su pago como *estrato*, bajo la forma por lo menos de una parte del poder. A fines de 1972 el semanario montevideoano *Marcha* publicó un documento de circulación interna en las fuerzas armadas, divulgado en la Asamblea General por el senador Amilcar Vasconcellos en el que al contrario de sus colegas de la región, no se habla de tomar el poder, sino de "gravitar directamente en la vida del país". El 7 de febrero las fuerzas armadas responden a la denuncia de Vasconcellos sin molestarse en negar el documento y agregando por primera vez su definición de lucha antisubversiva (para la que habían sido llamados por el Ejecutivo), que incluía la lucha contra la *sedición*, que era una parte de la *subversión*. Esta última incluía las actitudes ajenas a la "básica escala de valores morales que deterioran el ordenamiento institucional, social, moral y económico nacional". El 9 y 10 de febrero se difunden por radio y televisión los comunicados números 4 y 7 del Ejército y la Fuerza Aérea, lanzando una especie de programa económico y político por parte de los militares que sólo es posible comprender dentro del anterior contexto: de participar directamente en la vida política nacional. En su momento causó no pocas polémicas acerca de si eran "peruanistas", conservadores, o simplemente oportunistas. En realidad arrojaron a la misma bolsa sin ton ni son un conjunto de ideas, de cuya total incoherencia, el Gral. Seregni, (entre pocos), que sabía con qué bueyes araba, se pudo dar entera cuenta. (*Cuadernos de Marcha*, marzo de 1973).

Otro síntoma de desafección al sistema provenía de la élite intelectual. El sistema educativo uruguayo no se adaptaba a la necesidad de aportar elementos capacitados al aparato productivo. Por un lado estaba completamente democratizado desde el punto de vista formal: los institutos privados eran minoría. La propia universidad no tenía exámenes directos de admisión ni requería pagos de colegiaturas. Pero ya en 1953 el historiador Roberto Ares Pons en un trabajo premiado por el semanario *Marcha* había notado que el sistema educativo de enseñanza secundaria, pese a ser gratuito, proporcionaba de hecho una educación para las clases media y alta. Se exigía un alto nivel de orientación más bien humanista que no se traducía en una capacitación plena para el mercado de trabajo. Los planes de estudio universitarios tenían la misma orientación universalista sin títulos intermedios que engendraban el famoso tipo del "eterno estudiante" frustrado, bien capacitado desde el punto de vista intelectual, pero obviamente insatisfecho desde el punto de vista de su inserción en el medio para la que estaba ideológicamente preparado. Esta visión pesimista por parte de un intelectual prestigioso como Ares Pons, que llegó a hablar de un "proletariado intelectual" tuvo su punto máximo en uno de los más grandes y prestigiosos escritores uruguayos: Mario Benedetti. Este ha sido calificado por el crítico Angel Rama como el "sismógrafo de la crisis", hablando de la "caducidad de un régimen que se proyecta desde la década del 40" (Ares Pons utiliza una expresión similar).

Aparte del carácter pesimista y lóbrego de las primeras obras que lo hicieron famoso, Benedetti escribió a principios de la década del 60 un ensayo titulado *El país de la cola de paja*, en el que señala entre otras cosas que el "hombre moral" es un desocupado, "sin sitio en la política ni en las profesiones llamadas libres". Su queja se centra en cómo la política vulgar lo ha invadido todo y generado paradójicamente la "indiferencia política" del uruguayo. En sus propias palabras "el Uruguay es la única oficina del mundo que ha alcanzado la categoría de república" (p. 56). Este pesimismo es la contrapartida política de la tremenda desesperación que revelan todas sus novelas.

Y sin embargo, en una posdata escrita en 1963 ya podíamos encontrar un atisbo de lo que vendría años después. Benedetti se muestra totalmente negativo con respecto al parlamentarismo, a las elecciones y las posibilidades de propaganda por parte de la izquierda. Y es así que habla de crear "un nuevo lenguaje propagandístico" (p. 144). Puso de ejemplo el secuestro de Fangio en la Cuba pre-revolucionaria, los barcos tomados por opositores portugueses y venezolanos, etc. En esa época nadie soñaba siquiera con que los tupamaros tomarían esa bandera. Ciertamente es que el MLN estaba en formación, pero dudo mucho que hubiera una conexión directa. Más bien señalaba un estado de ánimo que recién comenzaría a cuajar hacia 1968. Crane Brinton señalaba con mucha agudeza que la desafección de los intelectuales era uno de los primeros grandes síntomas de la inestabilidad

revolucionaria.

La crisis general, que solamente comienza a apuntarse en 1966, induce a la burguesía a buscar un nuevo recambio que vaya más allá de las figuras políticas, permitiéndoles a su vez permanecer en sus posiciones de poder. Entonces el cambio se orienta hacia una salida de tipo presidencialista. Es así que la reforma constitucional pasa nuevamente al primer plano, dejando de lado las auténticas causas de la crisis. El circo reformista adquiere un dominio tan grande que incluso parte de la izquierda, encabezada por el Partido Comunista a través del Frente Izquierda de Liberación cae en sus redes, presentando un proyecto constitucional alternativo, lógicamente con otra orientación. No es el momento de entrar en consideraciones acerca de si era correcto o no (este autor lo apoyó), pero sirve de indicador de cómo se estaba viendo las alternativas políticas en el momento.

En las elecciones de noviembre de 1966 gana la reforma propuesta por el Partido Colorado y sube a la presidencia el Gral. (R) Oscar Gestido, la única figura no gastada de su partido. La constitución aprobada tenía un fuerte carácter represivo, con lo que se allanaba el camino para un fuerte control político. Pero no se había agotado el camino de la coparticipación política. Su gabinete ministerial representaba toda la gama de posiciones dentro del partido, incluso de las más progresistas. Esto por sí solo no podía resolver las grandes contradicciones de la base económica, por lo que esta situación no podía durar mucho tiempo. Como siempre que se produce este tipo de

empate político en condiciones de crisis, se dejó la resolución al mecanismo de la inflación y la lucha de los exportadores por conseguir el máximo de devaluaciones posible.

Por otra parte, en 1966 culminó el proceso de unificación sindical en torno a la poderosa Convención Nacional de Trabajadores (CNT) de clara orientación clasista y liderada mayoritariamente por el Partido Comunista, aunque con participación de otros sectores de la izquierda. Esta situación era poco común en América Latina donde las centrales sindicales más fuertes estaban organizadas por fuerzas proclives al gobierno, social-demócratas de dudosa orientación, o eran retadas en su unicidad por otras centrales de cierta fuerza. En Uruguay, de los grupos sindicales que no habían llegado a adherirse a la CNT unos eran clasistas y el resto tenían un peso meramente simbólico.

En estas condiciones, la única salida —hipotéticamente hablando— legitimadora hubiera sido la conformación de algún tipo de pacto social, compromiso histórico que posiblemente ciertas fuerzas de la izquierda uruguaya no mirarían con malos ojos. Pero no había en el Uruguay una capa de la burguesía que pudiera servir de interlocutor. La burguesía industrial de base nacional llevaba bastante tiempo en retirada. En esas condiciones, el empate político duró poco. En diciembre de 1967 providencialmente fallece el presidente Gestido, renuncian los ministros progresistas (alguien los llamaría "de orientación batllista"), y asciende al poder su vicepresidente Jorge Pacheco Areco

vinculado al periódico *El Día*, que increíblemente varias décadas antes había sido el bastión de José Batlle y Ordóñez.

Con Pacheco comienzan a ascender al gobierno como ministros los representantes directos del capital financiero, como Jorge Peirano, vinculado a más de 70 empresas, o un César Charlone, sobre el que algunos en broma preguntaban si estaba emparentado con la persona del mismo nombre que había dirigido en 1933 la política económica del dictador Gabriel Terra. No se trataba de ningún pariente sino de la misma persona. A partir de ese momento la confrontación directa estaba dada. La dichosa constitución aprobada en 1966 proporcionaba al gobierno no sólo un adecuado marco represivo, sino también la posibilidad de imponerse al parlamento declarando con urgencia ciertos proyectos de leyes y la posibilidad de prescindir de la sanción parlamentaria si este organismo no se ha pronunciado en cierto plazo.

La piadosa muerte de Gestido lo salvó quizá de tomar él mismo a su cargo los pasos decisivos hacia una "dictadura constitucional". El gobierno de su oscuro sucesor carecía totalmente de base política. Gobernaba con lo más reaccionario de la oligarquía financiera, ante la oposición de la clase obrera organizada, la presidencia de los militares, la agresividad opositora de las élites intelectuales; todo lo que generaba prolongados conflictos sindicales, que se transformaban en foco de actividades opositoras, en muchos casos no canalizadas a través de la central sindical.

La explosión de la guerrilla urbana, que comienza en 1968 (entre 1962 y 1967 existió de manera totalmente marginal) forma parte de esta impasse. Canaliza las inquietudes políticas de los sectores sindicales minoritarios, pero más radicalizados, así como a vastas masas de estudiantes que veían cada vez más cerrados los caminos de la integración al sistema productivo. Las fuerzas policiales, de por sí suficientes para enfrentar la rebeldía sindical, ya no estaban capacitadas para reprimir este vasto movimiento. No se trataba del tipo y calidad del armamento de la guerrilla urbana, sino de un problema de organización. El ejército, con su estructura cuartelaria y su intocabilidad por la justicia civil, era el más indicado para la tarea. Y por eso fue llamado.

Ciertos autores hablan de la conspiración militar para tomar el poder como originada hacia 1967 y 1968. Es posible que algunos grupos estuvieran trabajando en eso, pero de manera sumamente aislada. En septiembre de 1971, las fuerzas armadas fueron llamadas a dirigir la lucha antiguerrillera, con motivo de la fuga de 111 tupamaros del presidio donde se encontraban. Necesitaron cinco meses para producir las primeras grandes detenciones en enero de 1972. Esto parece indicar que la "conspiración militar" no tenía un buen grado de organización. Pero a partir del momento en que fueron llamados comenzó a generarse el proceso de participación política que los llevaría más adelante a tomar el poder.

El centro máximo del poder imperial también actuó. En 1969 el jefe de Inteligencia y Enlace de la policía se-

ñalaba el estilo de lucha de los paracaidistas franceses en Argelia como un ejemplo a imitar. Y ese comisario —Alejandro Otero— estaba en la nómina de pagos de la CIA, según lo asegura su ex-agente Phillip Agee. M. Klare señalaba que entre 1969 y 1973 el 10 por ciento de los alumnos de una misteriosa escuela que enseñaba tácticas de "guerra sucia" en Estados Unidos, eran uruguayos.

CONCLUSIONES

Quise explicar el rápido deterioro de las instituciones uruguayas a partir de la base sobre la que se asentó, más que explicar "el principio del fin", que se inicia en 1968. Porque no tiene sentido analizar, por ejemplo, el período que va entre septiembre de 1971 a junio de 1973 sin saber las determinaciones últimas que escondían las actitudes de las diferentes fracciones sociales. Un indicador de la incapacidad de la oligarquía uruguaya para asumir claramente el control de la situación se puede ver en que entre marzo de 1967 a junio de 1971 se efectuaron sesenta y dos designaciones ministeriales.

Vimos que el papel intermediador del estado se agotó hacia 1966 y éste entró en su nueva época con la desafección de los intelectuales, la indiferencia de los militares, la oposición de la clase obrera y de la guerrilla. Y lo peor era que no tenía nada que ofrecer a nadie de manera que pudiera conformar a los demás. En estas condiciones sólo una dictadura podría permitir la subsistencia del capitalismo uruguayo. Una dictadura que necesariamente debía de ser feroz por cuanto debía liquidar a fuertes opositores. Los militares no tenían ninguna apreciación profunda de la realidad uruguaya. Cuando fueron llamados al combate decidieron exigir su pago, vengándose de este modo de los años de olvido. Para justificar su intervención permanente tenían que atacar al aparato burocrático-estatal, demostrando su ineficiencia. No dudaron en echar mano para esta tarea a los propios tupamaros detenidos y que poseían información, para al final aliarse con la propia burguesía financiera corrupta. Ambos eran antiestadistas, aunque no estuvieran de acuerdo en que era lo que no funcionaba bien por parte del estado. Pero no vacilaron en aliarse para dar al Uruguay los años más aciagos de su historia. ■

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

AGGE, P. *Inside the Company. CIA Diary.* Penguin Books, London, 1973.

ARES PONS, R. *La intelligentsia uruguaya.* Ed. de la Banda Oriental, Montevideo, 1968.

——— *¿Es viable un Uruguay independiente? El ideal de la Patria Grande a través de la Historia.* Cnos. de Patria Grande N. 1, México, 1983.

BENEDETTI, M. *El país de la cola de paja.* Arca, Montevideo, 1966.

- BENVENUTO, L. *Breve historia del Uruguay*. Arca, Montevideo, 1967.
- BONILLA, J. "La reestructuración capitalista del Uruguay (1958-1976)", en ERESU, *Uruguay: dictadura y realidad nacional*, México, 1981.
- CAMPIGLIA, N. *Los grupos de presión y el proceso político. La experiencia uruguaya*. Arca, Montevideo, 1969.
- FARAONE, R. *El Uruguay en que vivimos*. Arca, Montevideo, 1968.
- FASSANO, F. *Después de la derrota; un eslabón débil llamado Uruguay*. Ed. Nueva Imagen, México, 1980.
- FINCH, H. *A Political Economy of Uruguay since 1970*. St. Martin's Press. N. Y., 1982.
- FRANCO, R. "Uruguay: ¿Batlle, el gran responsable?" *Nueva Sociedad*, N. 16, 1976.
- GITLI, E. "Uruguay: del fin de la utopía a la dependencia fascista", en *Cuadernos Americanos*, México, 5, 1976.
- La ideología militar y la contrarrevolución en el Cono Sur*. (inédito), 1980.
- Instituto de Economía, *El proceso económico del Uruguay*. Ed. Universidad, Montevideo, 1969.
- KAUFMAN, E. *Uruguay in Trensition*. Transaction Books, N.J., 1979.
- KLARE, M. y STEIN, N. *Armas y poder en América Latina*. Ed. ERA, México, 1978.
- LINDAHL, G. *Uruguay's New Path*. Library and Institute of Ibero-American Studies, Stookholm, 1962.
- LOUIS, J. *Battle y Ordóñez, apogeo y muerte de la democracia burguesa*. Nativa libros, Montevideo, 1972.
- MARTINEZ MORENO, C. "Crepúsculo en Arcadia", en Benvenuto et al, *Uruguay hoy*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
- MICHELINI, Z. *Uruguay vencerá* (discursos y entrevistas). Ed Laia, Barcelona, 1976.
- MINELLO, N. *La militarización del estado en América Latina: un análisis de Uruguay*. El Colegio de México, 1976.
- RAMA, A. "La generación crítica", en Benvenuto et al, *Uruguay Hoy*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
- REAL DE AZUA, C. "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy", en Benvenuto et al, *Uruguay hoy*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
- Herrera. El colegiado en Uruguay*. CEAL, Buenos Aires, 1972.
- VANGER, M. *José Batlle y Ordóñez, pensador, político, historiador, antropólogo*. Eudeba, Buenos Aires, 1968.